

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN Nº 14174-2017
HUÁNUCO**
Reposición al centro de trabajo

El principio de primacía de la realidad o de veracidad se constituye en un elemento implícito en nuestro ordenamiento y es concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución Política del Perú de 1993, que ha visto al trabajo como un deber y un derecho base del bienestar social y medio de la realización de la persona.

Lima, veintiuno de enero de dos mil veinte.

**LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-**

VISTA: La causa número catorce mil ciento setenta y cuatro - dos mil diecisiete – Huánuco, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia:

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandado **Gobierno Regional de Huánuco**, mediante escrito de fecha 02 de junio de 2017¹, contra la sentencia de vista de fecha 23 de mayo de 2017², que revocó la sentencia apelada de fecha 06 de mayo de 2016³, que declaró infundada la demanda, y reformándola la declaró fundada en parte; en el proceso contencioso administrativo seguido por Katia Soledad Molina Aparicio, sobre reposición al centro de trabajo.

¹ Ver folios 289.

² Ver folios 279.

³ Ver folios 177

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN Nº 14174-2017
HUÁNUCO**
Reposición al centro de trabajo

FUNDAMENTO DEL RECURSO:

Por resolución de fecha 13 de junio de 2018⁴, se declaró procedente por las siguientes causales: **infracción normativa del artículo 139º, inciso 5) de la Constitución Política del Estado; 2º numeral 1), 2) y 3) de la Ley N.º 24041; 1º, 2º y 12º inciso d), 15º del Decreto Legislativo N.º 276; 28º y 38º, literal b) del Decreto Supremo N.º 005-90-PCM y 5º de la Ley N.º 28175.**

CONSIDERANDO:

Primero. La infracción normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.

ANTECEDENTES

Segundo. Del escrito de demanda de folios 58, Katia Soledad Molina Aparicio interpone demanda contenciosa administrativa contra el Gobierno Regional de Huánuco, solicitando que se declare el restablecimiento o reconocimiento de su derecho de reposición a su puesto de trabajo, en la plaza de secretaria de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco u otro cargo similar con la remuneración mensual de

⁴ Ver folios 45 del cuaderno de casación.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN Nº 14174-2017
HUÁNUCO**
Reposición al centro de trabajo

S/.1,400.00 soles, regulado por el Decreto Legislativo N.º 276 y si le corresponde ingresar a planillas durante el tiempo ha prestado servicios desde mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014.

FUNDAMENTOS DE LAS SENTENCIAS

Tercero. Mediante sentencia de primera instancia se declaró infundada la demanda, bajo el argumento que la demandante trabajó períodos ininterrumpidos que alcanzó 1 año, 7 meses y 15 días, pero se realizó mediante contratos de servicios personales para proyectos de inversión, primero como Secretaria I y luego como Técnico Administrativo I; por lo tanto no está protegida por la Ley N.º 24041.

Cuarto. La sentencia de vista revocó la sentencia, reformándola declaró fundada en parte la demanda ordenando que se reincorpore a la demandada al centro de trabajo en su condición de servidora pública contratada, en una plaza de igual o similar nivel remunerativo y grupo ocupacional en el que venía desempeñándose hasta antes de su cese, sosteniendo que el cargo que ejerció la demandante fue de secretaria que tiene naturaleza permanente y subordinada, propia de una dependencia pública, por tanto, en aplicación del principio de primacía de la realidad, sí existió relación laboral entre la demandante y el demandado de naturaleza permanente.

DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA

Quinto. El debate gira en determinar si corresponde reincorporar a la demandante como servidora pública contratada en una plaza de igual o similar nivel remunerativo en aplicación del artículo 1º de la Ley N.º 24041.

ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA

Sexto. Debido proceso

1. El debido proceso formal constituye una garantía constitucional que asegura que, en la tramitación de un proceso, se respeten unos determinados requisitos mínimos⁵. Tales requisitos, que han sido objeto de discusión⁶, en general se considera que abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; y, (vi) Derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas.

2. Así las cosas, no ocurren en el presente proceso tales omisiones; por el contrario, aquí se ha respetado el derecho a ser informado del proceso, al juez imparcial, a la publicidad del debate, al derecho de defensa, a la prueba, a ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez legal, siendo que, además, tales hechos no han sido cuestionados

⁵ CAROCCA PÉREZ, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104.

⁶ Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia norteamericana, que ese "máximo de mínimos" estaría constituido por los requisitos de notificación y audiencia (notice and hearing). BERNARDIS, Luis Marcelo de. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 392-414.

Sétimo. Motivación de las resoluciones judiciales

1. La constitucionalización del deber de motivar permite a las partes controlar el significado de la decisión (función endoprocesal) y posibilita el control democrático de los jueces, que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia de la misma⁷ (función extraprocesal). Hay que precisar que la motivación no significa la exteriorización del camino mental seguido por el juez, sino que exista una justificación racional de lo que se decide. Se trata de una justificación racional que es, a la vez, interna y externa. La primera consiste en verificar que: *“el paso de las premisas a la conclusión es lógicamente -deductivamente- válido”* sin que interese la validez de las propias premisas. Por su parte, la justificación externa consiste en controlar la adecuación o solidez de las premisas⁸, lo que supone que la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera⁹. En esa perspectiva, la justificación externa exige¹⁰: (i) que toda motivación debe ser congruente, de lo que sigue que no cabe que sea contradictoria; (ii) que toda motivación debe ser completa, por lo que deben motivarse todas las opciones; y (iii) que toda motivación debe ser suficiente, por lo que es necesario ofrecer las razones jurídicas que avalen la decisión.

⁷ IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Palestra-Temis, Lima-Bogotá 2014, p. 15. Aliste Santos, Tomás Javier. La motivación de las resoluciones judiciales. Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, p.p. 158-159. De lo que sigue que la actividad del juez también se vincula a los fenómenos políticos, sociales y culturales del país y que la sentencia es, también, un acto de gobierno y plantea un programa de comportamiento social. Guzmán, Leandro. Derecho a una sentencia motivada. Editorial Astrea, Buenos Aires-Bogotá 2013, p. 195.

⁸ ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justificación de las decisiones judiciales. En <http://razonamientojuridico.blogspot.com>.

⁹ MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María. Introducción a la Teoría del Derecho. Madrid, Marcial Pons Editores, p184.

¹⁰ IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. Ob. cit., p. 26.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN Nº 14174-2017
HUÁNUCO**
Reposición al centro de trabajo

2. En esa perspectiva en cuanto a la justificación interna se advierte que el orden lógico propuesto por la Sala Superior ha sido el siguiente:

- a. Como **premisa normativa** la sentencia ha considerado el artículo 1º de la Ley N.º 24041 y el artículo 38º del Decreto Supremo N.º 005-90-PCM.
- b. Como **premisa fáctica** la Sala Superior, ha indicado que la labor realizada por la demandante no era en proyectos de inversión.
- c. Como **conclusión** la sentencia considera que la demandante se encuentra protegida por la Ley N.º 24041.

En ese sentido se advierte que la conclusión a la que arriba es congruente formalmente con las premisas establecidas, por lo que existe adecuada justificación interna en la sentencia impugnada.

3. En lo que concierne a la justificación externa, ésta consiste en controlar la adecuación o solidez de las premisas¹¹, lo que supone que la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera¹². En esa perspectiva, este Tribunal Supremo estima que tal justificación externa existe en el sentido que se han utilizado normas del ordenamiento jurídico para resolver el caso en litigio, utilizando como premisas fácticas los hechos que han acontecido en el proceso. Esta correlación entre ambas premisas ha originado una conclusión compatible con la interpretación de la norma.

4. En lo que respecta a los problemas específicos de motivación (aparente e insuficiente) en el presente caso no se aprecia déficit motivacional; por el contrario, la Sala Superior ha sido escrupulosa al detallar las razones de su fallo, siendo su evaluación prolija en lo que respecta al material probatorio y

¹¹ ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justificación de las decisiones judiciales. En <http://razonamientojuridico.blogspot.com>. Pons Editores, p. 184.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN Nº 14174-2017
HUÁNUCO**
Reposición al centro de trabajo

el análisis de las normas jurídicas y hechos sometidos a controversia, conforme se advierte de la lectura de los considerandos 6 a 11 de la sentencia de vista.

5. Por lo antes expuesto no es factible amparar la denuncia de infracción de los artículos 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado.

Octavo. La Ley N.º 24041

1. El artículo 1º de la Ley N.º 24041 ¹³, establece que: “Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15º de la misma ley”.

2. La norma materia de análisis, para efectos de su aplicación, básicamente determina dos requisitos, esto es: i) que la parte trabajadora haya realizado labores de naturaleza permanente; y, ii) que dichas labores se hayan desarrollado o efectuado por más de un año ininterrumpido.

3. El principio de primacía de la realidad o de veracidad¹⁴ se constituye en un elemento implícito en nuestro ordenamiento y es concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución Política del Perú de 1993, que ha visto al trabajo como un deber y un derecho base del bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo 22º), como un objetivo de

¹³ Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 28 de diciembre de 1984.

¹⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 49-2011-AA, fundamento 3.- “En relación al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, se ha precisado, en la Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 1944-2002-PA/TC, que mediante este principio “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (fundamento 3)”.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN Nº 14174-2017
HUÁNUCO**
Reposición al centro de trabajo

atención prioritaria del Estado (artículo 23º), que delimita que el Juez en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o de acuerdos, debe darle preferencia a lo primero, es decir, a lo que ocurre en el terreno de los hechos o de la realidad, pues el Contrato de Trabajo constituye un contrato realidad, que se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el servicio con prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a dicha relación.

4. Como dice De Los Heros¹⁵ existe presunción *iuris tantum* del carácter indeterminado de la relación de trabajo y para que esta presunción se destruya, es necesario, no solamente que la voluntad de las partes se exprese fijando en forma expresa su duración, sino que, además, el contrato obedezca a una realidad, la de la naturaleza temporal del trabajo o actividad contratada; lo contrario importaría un fraude a la ley laboral.

5. En el caso en cuestión, se advierte que la trabajadora ha realizado las siguientes labores:

- Del 16 de mayo al 30 de junio de 2013, Secretaria I, Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 de agosto al 30 de setiembre de 2013, Secretaria I, Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013, Secretaria I. Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 02 al 31 de enero de 2014, Secretaria I, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de la Gerencia Regional de Infraestructura.

¹⁵ DE LOS HEROS Pérez Albela, Alfonso. "Los Contratos de Trabajo de duración determinada: ¿Regla o Excepción?". En: Los Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano-Libro Homenaje al Profesor Américo Pía Rodríguez. Grijley, Segunda Edición. Lima, 2009, p. 296.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN Nº 14174-2017
HUÁNUCO**
Reposición al centro de trabajo

- Del 01 al 28 de febrero de 2014, Secretaria I, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 al 31 de marzo de 2014, Secretaria I, Sub Gerencia de Obras y Supervisión de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 al 30 de abril de 2014, Secretaria I, Sub Gerencia de Obras y Supervisión de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 al 31 de mayo de 2014, Técnico Administrativo I, Sub Gerencia de Obras y Supervisión de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 al 30 de junio de 2014, Técnico Administrativo I, Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 al 31 de julio de 2014, Técnico Administrativo I, Sub Gerencia de Obras y Supervisión de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 al 31 de agosto de 2014, Técnico Administrativo I, Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 al 30 de setiembre de 2014, Técnico Administrativo I, Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 al 31 de octubre de 2014, Técnico Administrativo I, Gerencia Regional de Infraestructura.
- Del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, Técnico Administrativo I, Gerencia Regional de Infraestructura.

6. Tales labores han sido de naturaleza permanente, han durado más de año y la trabajadora ha tenido la calidad de subordinada con respecto a su empleador, lo que se acredita con el memorándum N.º 166-2013-GRH-GRI/SGSL de la página 45 y el memorando múltiple N.º 031-2013-GRH-GRI/SGSL de la página 46 que explicita cuáles son las funciones de la demandante y de las capacitaciones que debe recibir, siendo relevante que la defensa de la entidad recurrente no cuestiona estos datos, sino que se ha

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN Nº 14174-2017
HUÁNUCO**
Reposición al centro de trabajo

laborado en proyectos de inversión, que la trabajadora no puede ingresar a la carrera pública sin concurso previo y que existen problemas de orden presupuestario.

7. Es preciso tener en cuenta, que al contrario de las labores temporales o eventuales reguladas en los contratos temporales a plazo fijo, **se consideran labores de naturaleza permanente** (*reguladas dentro de contratos a plazo indeterminado*), a aquellas que son constantes por ser inherentes a la organización y funciones de la Entidad Pública, así como a los servicios que brinda la misma, lo cual implica que el servidor debe haberse desempeñado en áreas de la entidad tales como las pertenecientes a su estructura orgánica básica o funcional, las relativas a prestación de servicios públicos que brinda a la comunidad en el ámbito de su competencia, u otras similares, o que importen el desarrollo de las mismas labores por un tiempo prolongado y continuado que evidencien la necesidad permanente del servicio prestado por el trabajador.

8. En esa perspectiva, se aprecia, que en el citado período la demandante desempeñó exclusivamente el cargo de Secretaria, en las Sub Gerencias de Supervisión y Liquidación y de Obras y Supervisión de la Gerencia Regional de Infraestructura, las cual conforme a los artículos 120º y 122º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de Huánuco¹⁶ forma parte de dicha entidad.

9. De lo precisado se puede colegir que las labores de secretaria efectuadas por la demandante en la referida dependencia, constituyen labores de naturaleza permanente, pues están estrechamente vinculadas a las

¹⁶ <http://www.regionhuanuco.gob.pe/oficial/assets/documentos/rof2013.pdf>

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

CASACIÓN N° 14174-2017
HUÁNUCO
Reposición al centro de trabajo

funciones que debe ejecutar permanentemente la referida gerencia; no siendo razonable asumir que una prestación o desarrollo de servicios que perdure por casi dos años, tenga carácter temporal (característica de las labores prestadas en proyectos de inversión), sino más bien evidencia la necesidad permanente de la labor ejecutada por la actora y de su contratación; tanto más, si dichas labores fueron prestadas para una dependencia que forma parte de la estructura básica de la entidad demandada, como es la Gerencia Regional de Infraestructura, que contempla en su estructura interna el cargo de Secretaria.

10. Por consiguiente, la demandada utilizó los contratos para proyectos de inversión prevista en el artículo 38° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM (aplicables para supuestos extraordinarios o transitorios) con el propósito de simular una relación laboral de naturaleza temporal cuando en realidad era de naturaleza indeterminada.

11. Siendo ello así la entidad demandada solo podía dar por terminada la relación laboral entablada con la demandante, por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en la citada ley, tal como lo prescribe el artículo 1° de la Ley N.° 24041, lo que no ha sucedido en el presente caso; razón por la que, resulta amparable el pedido de reposición petitionado en la demanda; tal como fuera debidamente determinado en la sentencia de vista.

12. Finalmente, en lo que atañe a la inaplicación de normas referidas al orden presupuestario, tales supuestas infracciones han sido declaradas como improcedentes al calificarse el recurso, por lo que resulta irrelevante análisis sobre ello.

Noveno. Los alcances de la Ley N.º 24041

En cuanto al ingreso a la carrera pública es necesario enfatizar que el artículo 1º de la Ley N.º 24041 no tiene como objetivo incorporar a los trabajadores contratados a la carrera administrativa, sino protegerlo contra el despido arbitrario que pudiera sufrir, como es el caso de la accionante, quien en el decurso del proceso acredita haber realizado labores de naturaleza permanente y por espacio mayor a un año ininterrumpido de servicios, por lo que solo pudo ser cesado o destituido previo proceso administrativo, lo que no ocurrió. No hay, por tanto, infracción a los artículos 1º, 2º, 12º inciso d) y 15º del Decreto Legislativo N.º 276, ni tampoco del artículo 5º de la Ley N.º 28175 ni de los artículos 28º y 38º, literal b), de l Decreto Supremo N.º 005-90-PCM dado que la presente controversia nada tiene que ver con el ingreso a la carrera pública de la accionante, sino con su mera reposición.

Décimo. Conclusión

En consecuencia, en este caso particular, al verificarse que la decisión adoptada por la Sala Superior no incurre en infracción normativa del artículo 1º de la Ley N.º 24041, el recurso casatorio deviene infundado de acuerdo a lo previsto en el artículo 397º del Código Procesal Civil.

DECISIÓN

Por estas consideraciones y según lo dispuesto por el artículo 397º del Código Procesal Civil; Declararon **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por el demandado **Gobierno Regional de Huánuco**, de fecha 02 de junio de 2017¹⁷; en consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de

¹⁷ Ver folios 289.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN Nº 14174-2017
HUÁNUCO**
Reposición al centro de trabajo

vista de fecha 23 de mayo de 2017¹⁸; **ORDENARON** remitir copias de las sentencias de las instancias de mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la República a fin de que determine quién o quiénes tuvieron responsabilidad en la contratación de la demandante, **DISPUSIERON** la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante **Katia Soledad Molina Aparicio**, sobre reposición al puesto de trabajo; Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo **Calderón Puertas**; y, los devolvieron.

S.S.

TELLO GILARDI

YRIVARREN FALLAQUE

TORRES VEGA

CALDERÓN PUERTAS

ÁLVAREZ OLAZABAL

Ymbs/Ccm

¹⁸ Ver folios 279.